

# PRÓLOGO

*Fernando Tauber*<sup>1</sup>

«Para que la democracia funcione, hacen falta demócratas. No alcanza con la acción ciega de los dispositivos institucionales». Esta afirmación del autor pone en evidencia que la cultura política de los pueblos se refleja en su vocación democrática y que los cimientos de una democracia de calidad, se construyen con un conjunto de aspectos, sobre los que esta obra indaga de manera apasionante, no sólo desde su conceptualización histórica, sino desde la revisión de la opinión pública, proponiendo escalas holísticas de análisis que articulan la dimensión mundial con la regional, nacional y local.

El interés por la política, los hábitos participativos, el asociacionismo, la tolerancia, la confianza entre las personas y las conductas de cooperación son recorridos con una minuciosa descripción de proporciones en predisposiciones y omisiones, que dimensionan el capital social que las distintas comunidades acumulan o del cual carecen.

La condición global contemporánea y las nociones de cultura, capital social y empoderamiento contextualizan y significan los procesos democráticos y la calidad de la política que los construye, en la que el acervo cultural de la sociedad como tal es un insumo determinante. El enfoque propuesto por el autor los reconoce como categóricos para su análisis, por

1. Presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Arquitecto y doctor en Comunicación. Secretario General (2004-2010), Investigador y Profesor de grado y posgrado de la UNLP. Dirigió numerosos planes estratégicos y otros proyectos para la gestión del desarrollo de comunidades e instituciones de la democracia, y escribió varios libros y artículos sobre los diversos aspectos que articulan la política, la planificación, la gestión y la comunicación con estos procesos.

lo que quizás sea conveniente repasar brevemente estos aspectos en estas páginas de presentación.

En primera instancia, es necesario advertir que el siglo xx tuvo como características determinantes la explosión demográfica del mundo, la urbanización de su localización y una impresionante aceleración en los procesos tecnológicos, en particular los comunicacionales; que condicionó y aún condiciona fuertemente la vida cívica y el desarrollo de las comunidades y redimensiona los procesos democráticos como sumamente complejos y característicos de esta circunstancia histórica.

Dice el autor que «no es casual que la democracia sea un hecho sumamente raro en la historia de la humanidad», pues es una forma de convivencia extremadamente difícil, que impone desafíos particulares a esta triple característica de densidad, urbanidad y tecnología que condicionan el escenario social contemporáneo en cualquier escala.

Efectivamente, este siglo se inició con una población de unos mil seiscientos millones de habitantes y terminó con más de seis mil millones, de los cuales, recién iniciado el siglo XXI, más del 50% habita en zonas urbanas, cuando en el inicio del siglo anterior, las ciudades no reunían al 15% de la población. «A escala mundial, en el siglo XX la población urbana aumentó desde 220 millones de habitantes en 1900 hasta 2.840 millones en el 2000» (Satterthwaite, 2006: 1), multiplicándose por trece en sólo cien años.

Además, «el número y la proporción de habitantes urbanos seguirán aumentando aceleradamente. Hacia 2030, la población urbana habrá llegado a 4.900 millones de personas. En comparación, se prevé que la población rural del mundo disminuirá en unos 28 millones entre 2005 y 2030. La mayor parte de este crecimiento ocurrirá en los países en desarrollo» (Martine, 2007: 6). En esa línea, las Naciones Unidas proyectan para el año 2025 una población de nueve mil millones de habitantes, con un 60% de población urbana y una paulatina desaceleración en el ritmo de crecimiento para el resto del siglo.

Esto permite deducir, no obstante, que la población urbana casi se duplicará en los próximos veinte años, período en que, el crecimiento de las ciudades seguramente será el factor más influyente para el desarrollo. Por lo pronto, hoy las «zonas urbanas generan un 55% del producto nacional

bruto (PNB) en los países de ingreso bajo, el 73% en los que tienen ingreso mediano y el 85% en los de ingreso alto» (Banco Mundial, 2000).

Por su parte, la aceleración en los procesos tecnológicos y en particular los comunicacionales, nos vincula con la globalización, ubicándola como una referencia contextual condicionante de los procesos democráticos contemporáneos y de la evolución de la cultura política de los pueblos.

Ubicamos el inicio de la etapa de globalización –enmarcada en un proceso de integración mundial que comprendió períodos previos de internacionalización y transnacionalización– hacia inicios de los años setenta del siglo pasado, cuando los cambios producidos en la economía, en la tecnología, en la sociedad y en su cultura y en la política, anunciaban una sociedad en la cual ya no sería excluyente la industria en la producción, la que sería superada en importancia por la información, el conocimiento y las comunicaciones informáticas. Además, un conjunto de hechos y procesos invirtieron las políticas keynesianas que habían dominado el capitalismo durante los anteriores veinticinco años y consolidaron las condiciones institucionales para la globalización, tales como el derumbe de las dictaduras comunistas en la URSS y en Europa del Este; el debilitamiento del poder sindical, una reducción de gastos en el Estado de bienestar a partir de la reducción de impuestos a los ricos y a las empresas y la desregulación y liberalización generalizada de los mercados, tanto nacional como internacionalmente (Castells, 2006).

Lo cierto es que una serie de acontecimientos impulsaron el fortalecimiento de las tendencias globalizadoras en los campos político, social, cultural y económico, tales como la creación de las instituciones de Bretton Woods, las revueltas estudiantiles y obrero estudiantiles del 68, el fin de la convertibilidad del dólar en oro y la crisis del petróleo, la Conferencia de Helsinki y finalmente la caída del Muro de Berlín (Fazio Vengoa, 2000).

Estos sucesos advertían el advenimiento de lo que en un principio se denominó «la sociedad posindustrial» (Bell, 1976), que luego y sucesivamente Brzezinski denominara «sociedad tecnocrónica», Drucker «sociedad del conocimiento» y Castells «sociedad de la información», y a la que el propio Manuel Castells, casi dos décadas después de esos inicios, ensanchara y complejizara en sus alcances, aportando la idea de «sociedad red».

Ciertamente, la reestructuración del sistema capitalista en la década del setenta, a partir de la interacción de asuntos como la crisis económica del industrialismo y la crisis política del estatismo; la proliferación y consolidación de movimientos sociales y culturales de finales de los sesenta y comienzos de los setenta, que predicaron y militaron una cultura de libertad en defensa del individuo social, sus derechos, sus diferencias y su medio, tales como el antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo; y fundamentalmente la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación, con inventos tales como el microprocesador, el ordenador personal, la central telefónica digital, Internet (y la recombinación del ADN). Las multiplicaciones y reacciones que desencadenaron esas interacciones, trajeron como consecuencia, a partir de los ochenta, un nuevo modo de desarrollo denominado «informacionalismo» y cuya fuente de productividad se basa en la tecnología de la gestión del conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos (Castells, 1996 y 2006).

Además, en términos socioculturales, el proceso de globalización consolida ese asunto y en la visión de sus diversos analistas, repasa dos características destacadas, con matices: «Por un lado, los pueblos y las estructuras sociales que anteriormente habían estado más bien apartados entre sí, ahora interfieren cada vez más en las condiciones de vida mutuas, física y materialmente. Por otro, hay un creciente flujo directo de cultura, de significados y de modos de expresión» (Hannerz, 1998: 97). Si bien se acentúan «la progresiva unificación planetaria y la homogeneización de los modos de vida;» también se multiplica «la producción de nuevas formas de heterogeneidad y el pluralismo que resulta de la emergencia de identidades transnacionales a través de procesos de etnogénesis o de radicalización de perfiles de identidad ya existentes» (Segato, 1997: 2).

El pensamiento moderno que había visualizado al mundo como una totalidad esencialmente ordenada y a los procesos de desarrollo desde una visión de «certidumbre» en el futuro como resultado de una suma de tendencias y decisiones, es reemplazado en el proceso global, por un pensamiento posmoderno que visualiza al mundo ya no como una totalidad, sino como «un número ilimitado de modelos de orden, cada uno de los cuales es generado por un conjunto relativamente autónomo de prácticas» (Bauman, 1995:

13); que registra a los procesos de desarrollo social, fundamentalmente democráticos, desde una visión de «incertidumbre», en la que se consolida «la pluralización de los discursos contextualizados por la comunidad y la tradición, que postula el carácter local de la verdad, el juicio y el gusto, algo que la modernidad negó y se propuso superar en la práctica» (Bauman, 1995: 181); y en el que los procesos o fenómenos imprevistos se incorporan como una variable fundamental en la construcción prospectiva de escenarios para el desarrollo de las comunidades y sus instituciones públicas.

La noción de comunidad, a la que hoy entendemos como el colectivo de representantes de los diversos sectores y actores socio-económicos que la integran, incluido el Estado, adquiere un significado central para el período; ya no con el sentido premoderno de búsqueda de certezas y seguridad en las relaciones humanas, sino a partir de identificarla como el concepto central de una nueva concepción cultural, en la que abundan los llamamientos a un vocabulario compartido, un mundo común, una comunidad de significados, tradiciones y formas de vida, en el que las prácticas locales, al igual que los sistemas de conocimiento, pasan a evaluarse desde las tradiciones propias y las «localidades», y las verdades, pasan a reconocerse casi exclusivamente desde un tiempo y un lugar determinado.

El estado dual contrapuesto –homogéneo /heterogéneo, singular /universal, local /global– que significa a la sociedad actual en su contexto, y la necesidad de adaptación permanente de la pauta cultural a ese juego de tensiones; vuelven necesario precisar los alcances del concepto que enmarca la dimensión de la cultura política de las sociedades en el trabajo presentado. En ese sentido, dice el autor que «los aspectos culturales y los legados históricos no son considerados como requisitos o condiciones previas, sino como factores que allanan el camino o plantean dificultades a las tareas de la construcción democrática», reconociendo una serie de elementos comprendidos en las concepciones más holísticas de la cultura, tales como las costumbres, ritos, leyes, instituciones, o el arte y la arquitectura.

Yúdice por su parte, relata que «...para la teoría antropológica *la cultura comunal*, en tanto conjunto de ideas y valores, confiere identidad al individuo [...] para fines políticos. La cultura es, por tanto, algo más que el anclaje proporcionado por un acervo de ideas y valores [...] se basa en la diferencia que funciona como un *recurso*» (Yúdice, 2003: 38).

En definitiva, «todas las sociedades son construcciones culturales, si entendemos cultura como el conjunto de valores y creencias que dan forma y motivan el comportamiento de las personas» (Castells, 2006: 68).

Sin embargo, si asociamos el alcance de la dimensión cultural a la sociedad red, en el marco de la globalización analizada, «no pareciera equivocado afirmar que la constante novedad, la complejidad y la incertidumbre, son igualmente tres de los fenómenos predominantes del nuevo paradigma cultural» (Fornoni y Perfeito, 2005: 45).

En ese marco, aunque toda práctica cultural refleja una sociedad, no toda práctica social es cultural, y la cultura política, por lo tanto, se reconoce como una práctica que permite concebirse como una fuerza creativa que le permite a un grupo social asumir y hacer frente a los cambios impuestos y necesarios para aspirar a progresar en forma sostenible, en un pie de igualdad y equidad endógena y exógena.

Establecido el alcance del concepto de cultura desde el que reconocemos el análisis del autor, la dimensión cultural en cuanto hábito colectivo (Bourdieu, 1972: 175) o «gramática generadora» de las prácticas sociales (Rist, 2000: 132) y el capital social o «confianza», en su condición de bien colectivo cuya acumulación beneficia a todos y no sólo a algunos; adquieren una condición diferente, ya no como medios para alcanzar un desarrollo social o institucional sostenible, sino como fines dependientes del modelo propuesto, aunque sea necesario reconocerlos nacidos en una cultura específica y por lo tanto difícil de desprenderlos de ella.

Bourdieu identifica tres tipos de capital que los actores sociales se esfuerzan en controlar y acumular: El capital económico, el capital cultural y el capital social o lo que él denomina «las relaciones» o el conjunto de redes sociales que un actor puede movilizar en provecho propio (Bourdieu, 1984[a]: 55). Y Putnam emplea «la noción de capital social para definir las condiciones institucionales de una comunidad cívica participativa y viva» (De Vylder, 1995: n.24). El propio De Vylder afirma que existen cinco tipos de capital en el campo del desarrollo humano sostenible: «el financiero, el físico, el humano, el natural y el capital social» (De Vylder, 1995:n.24, p.9) que comprenden, por lo menos, las instituciones, la democracia parlamentaria, la prensa libre, el respeto por los derechos humanos, las normas para la interacción social, un sistema judicial que defiende la ley y la justi-

cia, los procesos y estructuras formales e informales –que constituyen la forma en que las instituciones se relacionan entre sí–, las normas y redes entre diferentes organizaciones y dentro de ellas, los temas vinculados a la rendición de cuentas y la transparencia y el grado de participación democrática y de control.

Este componente es identificado en general como «empoderamiento» social y es entendido como la búsqueda de la coparticipación del poder o la capacidad de influir en él a partir de un proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven.

La filosofía del empoderamiento está muy ligada a los denominados enfoques participativos horizontales que el autor analiza y que están presentes en el mencionado campo del desarrollo democrático desde los años setenta, que vienen proponiendo como objetivo de una estrategia de empoderamiento, reducir la vulnerabilidad de un grupo social, involucrarlo en los beneficios de un proceso de desarrollo democrático, es decir crear condiciones para lograr mayor equidad en cuanto a oportunidades y derechos, mejorar el acceso a conocimientos, recursos y servicios sociales, así como a la participación en los procesos de decisión (COSUDE, 2007).

Podemos decir que el empoderamiento social está relacionado con el acceso y control de tres tipos de poderes: a) el *social*, entendido como el acceso a la base de riqueza productiva; b) el *político*, o acceso de los individuos al proceso de toma de decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro y a la rendición de cuentas como resultado de la vigilancia social, garante de mayor transparencia y c) el *psicológico*, entendido en el sentido de potencialidad y capacidad individual (Friedman, 1992).

Estos poderes se vinculan con tres dimensiones: a) la de las *relaciones próximas*, como capacidad de negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y las decisiones, b) la *colectiva*, como participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada en la cooperación; y c) la *personal*, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual (Rowlands, 1997).

En síntesis, podemos decir que «las cuestiones políticas clave que vinculan democracia, empoderamiento y cultura implican los procesos de acceso a la libertad de expresión y al poder. En la dimensión social, el

empoderamiento supone el acceso a una pluralidad de fuentes de información, así como a canales de expresión, representación y reparación de situaciones injustas» (Fuentes, 1997: 65).

La subjetivación del poder social de la que hablamos, lleva a razonar que la legitimidad y sostenibilidad de las decisiones políticas en entornos con un fuerte empoderamiento social, depende mucho más del acuerdo que del acierto, pues «el efecto social de legitimación no depende de la verdad del criterio de definición, sino de la competencia para imponerlo como verdadero» (Costa y Mozejko, 2001: 38). La idea, el argumento y la lógica de la decisión se miden con la vara del consenso y «la opinión... es el único fundamento social de la nueva certidumbre, (y) la argumentación es la vía real a la verdad» (Bauman, 1995: 56). Basado en ese concepto, la investigación propuesta por el autor adquiere un especial significado. La opinión social, medida y evaluada, ya no sólo ayuda a construir la verdad, sino que es la verdad.

«En sociedades donde circula mucha información, lo único racional es aquello que la gente cree que es racional. Suena excesivo, pero es así: las cosas no son sino lo que la gente cree que son» (Stuhlman, 2001: 67) y responderá a la política propuesta, no por sus ventajas «objetivas» sino por lo que cree que son esas ventajas. «Lo socialmente producido y por lo mismo, arbitrario, es representado como natural y, en consecuencia, transformado en principio de legitimidad y aceptabilidad de las prácticas. De hecho, asegura (incluso) la reproducción de lo arbitrario como natural» (Costa y Mozejko, 2001: 37). Por eso, la producción social o colectiva de las decisiones a partir de la participación, es una condición básica de su legitimidad y sostenibilidad, no porque garantice el acierto o el éxito en la decisión, sino porque refuerza con su respaldo el rumbo de los procesos e involucra al conjunto en la responsabilidad de haberla tomado.

En ese sentido, el autor de este libro afirma que «surgen dos dimensiones de la legitimidad: de un lado, un principio general, según el cual la democracia es «la mejor» o «la menos mala» de las posibles formas de gobierno; de otro, la percepción concreta de la democracia en el propio país y en ese momento histórico: la idea de que a pesar de sus fallas y limitaciones, es mejor que cualquier otro régimen que haya podido instaurarse en él».



En esa línea, la investigación concluye que «donde una parte de la población se compone de personas tolerantes, que confían en los demás, respetan las normas cívicas —no por temor a un tercero, sino como parte de la cultura de convivencia—, valoran su autonomía y la de los otros, se interesan por los asuntos públicos y la marcha de la sociedad, sienten que pueden influir sobre éstos y están dispuestas a actuar con ese fin, la democracia encuentra su cimiento más firme».

Efectivamente, la vida cívica y política será de mayor calidad si la tolerancia, la confianza y las normas de cooperación se hallan razonablemente difundidas en la sociedad, y si reconoce que existe una relación directa entre confianza y estabilidad política y entre confianza y calidad de la democracia.

Finalmente, resta acotar que el intenso recorrido que propone el autor por las opiniones y su evolución en diversas sociedades, cada una en su tiempo y en su lugar, va nutriendo al lector de argumentos y fundamentos sobre la idea de democracia, de cultura política y del capital social necesario para permitir la maduración de estos procesos, basados fundamentalmente en la confianza que necesita tener la sociedad para involucrarse. Identifica avances y dificultades que afrontan los procesos democráticos en el devenir histórico contemporáneo que nos ayudan a dimensionar la responsabilidad que nos toca para ayudar a construirlos y el desafío que debemos asumir como una sociedad que busca estabilizarse y madurar en su desarrollo. Y con ese marco, nos induce a reflexionar sobre un interrogante inquietante que recorre la obra y que fortalece su fuerte llamado a la construcción colectiva y a la participación comprometida:

«¿Está la democracia destinada a defraudarnos, ya sea porque, para llegar a existir, deba prometernos más de lo que puede dar, o porque en realidad no puede prometernos nada?»